

Control social en la asignación del gasto público territorial

Argenis Gabriel Rodríguez Bravo¹

Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa, Ecuador

argenis.rodriguez@unesum.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0001-6482-7811>

Madeline Lizeth Contreras Jaramillo²

Estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa, Ecuador

contreras-madeline7623@unesum.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0007-2736-8293>

Cómo citar: Control social en la asignación del gasto público territorial. (2026). <i>Visión Académica</i> , 4(1), 489-501. https://doi.org/10.70577/fcxa0w28	Fecha de recepción: 2026-01-20 Fecha de aceptación: 2026-02-13 Fecha de publicación: 2026-03-09
--	---

Resumen

La asignación del gasto público territorial enfrenta limitaciones relacionadas con la transparencia institucional y la participación ciudadana, lo que restringe el ejercicio efectivo del control social sobre la gestión de los recursos públicos. En este contexto, el objetivo del estudio fue analizar la incidencia del control social en la asignación del gasto público territorial, considerando dimensiones vinculadas con la transparencia presupuestaria, el acceso a la información pública y la participación ciudadana. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con alcance explicativo y diseño no experimental de corte transversal, sustentado en el análisis de información secundaria proveniente de informes institucionales, registros estadísticos y bases de datos elaboradas por organismos estatales y entidades nacionales e internacionales relacionadas con la gestión fiscal y la gobernanza pública. Para el procesamiento de la información se aplicaron técnicas de estadística avanzada, específicamente regresión lineal múltiple y análisis factorial exploratorio, con el propósito de identificar relaciones estructurales entre los mecanismos de control social y los patrones de asignación del gasto público territorial. Los resultados evidencian que la transparencia presupuestaria presentó la mayor incidencia en la asignación del gasto público territorial ($\beta = 0.61$), seguida por la participación ciudadana ($\beta = 0.48$) y el acceso a la información pública ($\beta = 0.37$). Asimismo, el análisis factorial permitió identificar tres dimensiones estructurales del control social: transparencia institucional, participación ciudadana y acceso a la información pública. Estos hallazgos evidencian que el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la participación ciudadana contribuye a mejorar la supervisión social y la eficiencia en la gestión del gasto público territorial.

Palabras clave: Control social, gasto público, transparencia, presupuesto, participación ciudadana.

Social oversight in the allocation of territorial public expenditure

Abstract

The allocation of territorial public expenditure faces limitations associated with institutional transparency and citizen participation, which restrict the effective exercise of social oversight over the management of public resources. In this context, the objective of the study was to analyze the influence of social oversight on the allocation of territorial public expenditure, considering dimensions related to budget transparency, access to public information, and citizen participation. The research was conducted under a quantitative approach with an explanatory scope and a cross-sectional non-experimental design, based on the analysis of secondary information from institutional reports, statistical records, and databases produced by governmental entities and national and international organizations related to fiscal management and public governance. For data processing, advanced statistical techniques were applied, specifically multiple linear regression and exploratory factor analysis, in order to identify structural relationships between social oversight mechanisms and patterns of territorial public expenditure allocation. The results show that budget transparency presented the greatest influence on the allocation of territorial public expenditure ($\beta = 0.61$), followed by citizen participation ($\beta = 0.48$) and access to public information ($\beta = 0.37$). Likewise, the factor analysis identified three structural dimensions of social oversight: institutional transparency, citizen participation, and access to public information. These findings demonstrate that strengthening fiscal transparency and citizen participation contributes to improving social supervision and efficiency in the management of territorial public expenditure.

Keywords: Social control, public spending, transparency, budget, citizen participation.

Introducción

El control social en la gestión del gasto público ha adquirido una relevancia creciente en los sistemas democráticos actuales, particularmente en los gobiernos territoriales donde las decisiones presupuestarias inciden de manera directa en la provisión de bienes y servicios públicos. La asignación del gasto público territorial representa un proceso complejo que articula decisiones técnicas, políticas y sociales orientadas a priorizar el uso de los recursos fiscales en función de las necesidades colectivas. En este escenario, el control social se configura como un mecanismo fundamental para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad de la gestión pública, al permitir que la ciudadanía supervise, evalúe y participe en los procesos de planificación y ejecución presupuestaria (Ramírez, 2021).

En los últimos años, la literatura académica ha destacado que los mecanismos de control social constituyen herramientas clave para mejorar la gobernanza pública y reducir las asimetrías de información entre el Estado y la sociedad. La participación ciudadana en los procesos de asignación del gasto público contribuye a fortalecer la transparencia institucional, al mismo tiempo que promueve una mayor corresponsabilidad entre los gobiernos territoriales y la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Desde esta perspectiva, el control social no se limita únicamente a la vigilancia del uso de los recursos públicos, sino que también implica la intervención activa de la sociedad en los procesos de deliberación y priorización del gasto público, generando espacios de

interacción entre actores gubernamentales y ciudadanos (Cárdenas, 2022).

Asimismo, diversos estudios recientes han evidenciado que la implementación de mecanismos de participación y control social puede mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, al permitir que las decisiones presupuestarias se orienten de manera más precisa hacia las demandas sociales prioritarias. En este sentido, la incorporación de la ciudadanía en los procesos de planificación y evaluación del gasto público fortalece la calidad de las políticas públicas territoriales y contribuye a consolidar modelos de gestión pública más inclusivos y transparentes. Según señala Velasco (2023), los sistemas de control social permiten fortalecer la legitimidad institucional y promover una cultura de rendición de cuentas que favorece la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

De igual manera, el análisis del control social en la asignación del gasto público territorial se vincula estrechamente con los principios de gobierno abierto, transparencia fiscal y participación ciudadana, los cuales han sido promovidos de manera creciente en América Latina durante las últimas décadas. Estos enfoques plantean que la apertura de la información pública, el acceso ciudadano a los procesos presupuestarios y la participación en la supervisión del gasto público constituyen elementos esenciales para consolidar instituciones públicas más responsables y orientadas al bienestar colectivo. En este contexto, la transparencia presupuestaria y la participación ciudadana se convierten en factores determinantes para fortalecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales (González, 2021).

Entre estos desafíos se encuentran la limitada disponibilidad de información presupuestaria accesible para la ciudadanía, las debilidades en los mecanismos institucionales de participación y la escasa cultura de control social en algunos contextos locales. Estas limitaciones generan una brecha entre los marcos normativos que promueven la participación ciudadana y la práctica real de los procesos de control social en la asignación del gasto público territorial (Morales, 2023).

En este marco, el análisis del control social en la asignación del gasto público territorial adquiere una importancia significativa para comprender cómo los mecanismos de participación ciudadana influyen en la transparencia, la eficiencia y la legitimidad de la gestión pública en los gobiernos subnacionales. Examinar esta relación permite identificar los factores institucionales y sociales que condicionan la efectividad del control social, así como evaluar su contribución al fortalecimiento de la gobernanza territorial y al mejoramiento de la calidad del gasto público. Por tanto, el estudio de esta temática resulta fundamental para generar conocimiento académico que contribuya al diseño de estrategias orientadas a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y a consolidar sistemas de gestión pública más abiertos, transparentes y responsables.

Control social y rendición de cuentas en la gobernanza territorial

En un municipio que decide publicar periódicamente los reportes de ejecución de obras públicas y el detalle del presupuesto asignado a proyectos comunitarios, la ciudadanía puede contrastar la información oficial con las necesidades territoriales y ejercer mecanismos de vigilancia sobre el uso de los recursos. Este tipo de prácticas ilustra cómo el control social puede consolidarse como un instrumento que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública territorial.

En este sentido, el control social en la asignación del gasto público se concibe como un proceso mediante el cual la ciudadanía participa activamente en la supervisión y evaluación de las decisiones presupuestarias adoptadas por las autoridades gubernamentales, contribuyendo a reducir la opacidad administrativa y a mejorar la legitimidad de las instituciones públicas (Osorio-Sanabria & Barreto-Granada, 2022).

Desde la perspectiva de la gobernanza pública, el control social se vincula estrechamente con el enfoque de gobierno abierto, el cual promueve la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas como pilares fundamentales para el fortalecimiento democrático. En este marco, la apertura de la información pública y la generación de espacios de interacción entre Estado y sociedad permiten que la ciudadanía supervise la gestión gubernamental y exija responsabilidad sobre el uso de los recursos públicos (Ruvalcaba-Gómez, 2023). Asimismo, la transparencia institucional se convierte en un requisito esencial para que el control social pueda ejercerse de manera efectiva, ya que la disponibilidad de información presupuestaria clara y accesible permite que los ciudadanos evalúen la coherencia entre las decisiones públicas y las necesidades sociales (Finol Romero, 2023).

La literatura reciente ha señalado que el control social adquiere mayor efectividad cuando se institucionalizan mecanismos de vigilancia ciudadana que permitan monitorear el desempeño de las autoridades públicas. Entre estos mecanismos destacan las veedurías ciudadanas, los observatorios sociales y las plataformas de seguimiento del gasto público, los cuales facilitan la interacción entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales (Magaña, 2023). En este contexto, el control social no solo se orienta a fiscalizar el uso de los recursos públicos, sino también a promover procesos de aprendizaje institucional que contribuyan a mejorar la calidad de la gestión pública (Maldonado Lozano et al., 2021).

De igual manera, el desarrollo del gobierno abierto ha impulsado nuevas estrategias para fortalecer el control social en los gobiernos territoriales, especialmente mediante el uso de plataformas digitales que facilitan el acceso a la información pública. Estas herramientas permiten que la ciudadanía consulte datos sobre el presupuesto público, el avance de los proyectos y los resultados de las políticas públicas, lo cual amplía las posibilidades de supervisión social sobre la gestión gubernamental (González Gallego et al., 2021). En consecuencia, el control social se consolida como un componente esencial para garantizar una administración pública más transparente, responsable y orientada al bienestar colectivo (Arévalo Martínez & Negrete Huelga, 2022).

Transparencia, participación ciudadana y presupuestos participativos en el control social del gasto público

En un proceso de presupuesto participativo en el que los habitantes de un barrio deliberan sobre la priorización de proyectos de infraestructura comunitaria, la ciudadanía puede intervenir directamente en la asignación de recursos públicos, evaluando qué iniciativas responden con mayor pertinencia a las necesidades del territorio. Este tipo de experiencias refleja cómo la participación ciudadana puede convertirse en un mecanismo concreto de control social del gasto público territorial. En este sentido, la transparencia presupuestaria se constituye como una condición fundamental para que la ciudadanía pueda acceder a información relevante sobre la planificación, asignación y ejecución de

los recursos públicos (Osorio-Sanabria & Barreto-Granada, 2022).

La transparencia en la gestión pública implica no solo la publicación de información gubernamental, sino también la disponibilidad de datos comprensibles y accesibles que permitan a la ciudadanía analizar las decisiones presupuestarias adoptadas por las autoridades. De acuerdo con González García y García García (2022), el concepto de gobierno abierto ha evolucionado hacia un enfoque que promueve la apertura institucional como un medio para fortalecer la participación ciudadana y mejorar la rendición de cuentas en las administraciones públicas. En este contexto, la transparencia se convierte en un instrumento que facilita el control social sobre las decisiones relacionadas con el gasto público.

En los últimos años, el presupuesto participativo ha sido reconocido como una de las herramientas más relevantes para fortalecer la participación ciudadana en la gestión de los recursos públicos. Este mecanismo permite que los ciudadanos intervengan en la definición de prioridades de inversión y en la evaluación de los resultados de las políticas públicas, generando procesos deliberativos que contribuyen a democratizar la gestión presupuestaria (López & Gil-Jaurena, 2021). Sin embargo, diversos estudios advierten que la efectividad del presupuesto participativo depende en gran medida del diseño institucional de los mecanismos de participación y de la capacidad de las autoridades para incorporar las decisiones ciudadanas en la planificación presupuestaria (Martínez, 2023).

Asimismo, la incorporación de herramientas digitales en los procesos de transparencia y participación ciudadana ha ampliado las posibilidades de interacción entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Las plataformas de datos abiertos y los sistemas de información presupuestaria permiten que los ciudadanos accedan a información detallada sobre el uso de los recursos públicos, lo cual facilita el monitoreo social de las decisiones gubernamentales (Flores Muñoz et al., 2022). De esta manera, la combinación entre transparencia, participación ciudadana y tecnologías de información contribuye a fortalecer los mecanismos de control social en la asignación del gasto público territorial (Quiroga Mantilla et al., 2022).

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo orientado al análisis estadístico de la relación entre control social y asignación del gasto público territorial. El estudio se estructuró mediante un diseño no experimental de corte transversal, basado en información secundaria proveniente de registros institucionales, informes oficiales y bases de datos sobre gestión fiscal y transparencia pública, lo que permitió observar las variables en su contexto natural sin intervención del investigador.

El alcance del estudio fue explicativo, dado que se buscó identificar patrones en la distribución del gasto público y estimar la incidencia de variables asociadas al control social, tales como transparencia presupuestaria, acceso a la información fiscal y participación ciudadana, sobre las decisiones de asignación de recursos en el ámbito territorial.

La información fue obtenida mediante revisión documental sistemática y análisis de bases de datos provenientes de organismos estatales, sistemas nacionales de administración financiera, portales de transparencia presupuestaria y plataformas de datos abiertos. A partir de estas fuentes se

construyeron indicadores vinculados con transparencia fiscal, acceso a información pública, participación social y asignación del gasto territorial.

Para el análisis estadístico se aplicó un modelo de regresión lineal múltiple con el fin de estimar la incidencia de los mecanismos de control social sobre la asignación del gasto público. De manera complementaria se empleó análisis factorial exploratorio para identificar dimensiones latentes asociadas a transparencia institucional, participación ciudadana y acceso a la información. El procesamiento se realizó mediante software estadístico especializado para garantizar la consistencia y validez de las estimaciones.

Resultados y discusión

El análisis de la información procedente de informes institucionales, bases de datos públicas y reportes de organismos nacionales e internacionales permitió identificar tendencias significativas en la relación entre el control social y la asignación del gasto público territorial. Desde una perspectiva analítica, la evidencia empírica muestra que los mecanismos de transparencia fiscal y participación ciudadana influyen de manera directa en la supervisión del uso de los recursos públicos y en la legitimidad de las decisiones presupuestarias adoptadas por las instituciones gubernamentales. En este sentido, diversos estudios han señalado que la participación social en los procesos presupuestarios contribuye a mejorar la calidad de las decisiones públicas y a fortalecer la eficiencia en la gestión de los recursos fiscales (Ruvalcaba-Gómez, 2023). Asimismo, el acceso a la información presupuestaria se constituye como un elemento esencial para que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de las autoridades públicas y exigir rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos estatales (Osorio-Sanabria & Barreto-Granada, 2022).

En la misma línea, la literatura reciente ha demostrado que los sistemas de gobierno abierto y transparencia pública generan condiciones favorables para fortalecer el control social en la gestión del gasto público. La disponibilidad de información presupuestaria accesible permite reducir las asimetrías informativas entre el Estado y la sociedad, facilitando la vigilancia ciudadana sobre las decisiones relacionadas con la asignación de recursos públicos (Finol Romero, 2023). De igual manera, los estudios sobre gobernanza pública destacan que la participación ciudadana se convierte en un componente clave para mejorar la legitimidad institucional y promover prácticas administrativas más responsables en el ámbito territorial (Maldonado Lozano et al., 2021).

A partir del análisis descriptivo de los indicadores recopilados en la base de datos, se identificaron patrones relevantes asociados con los niveles de transparencia fiscal, acceso a la información pública y participación ciudadana en los procesos de asignación del gasto público territorial.

Tabla 1

Indicadores de control social y transparencia en la gestión del gasto público territorial

Indicador	Promedio (%)	Interpretación
Acceso ciudadano a información presupuestaria	64 %	Nivel moderado de disponibilidad de información
Participación ciudadana en decisiones presupuestarias	48 %	Participación limitada en procesos de asignación
Percepción de transparencia institucional	59 %	Transparencia institucional moderada
Supervisión social de proyectos públicos	42 %	Bajo nivel de control ciudadano

Nota. indicadores basados en informes institucionales y estudios sobre transparencia fiscal y control social territorial.

Los resultados presentados en la Tabla 1 permiten observar que, aunque existe disponibilidad de información presupuestaria en los gobiernos territoriales, la participación ciudadana en la toma de decisiones presupuestarias continúa siendo limitada. Esta situación coincide con lo señalado por diversos autores, quienes sostienen que los mecanismos participativos suelen concentrarse en espacios consultivos, sin consolidarse plenamente como instrumentos vinculantes en la asignación del gasto público (Martínez, 2023). Del mismo modo, investigaciones recientes evidencian que las políticas de transparencia institucional aún presentan desafíos relacionados con la accesibilidad y la comprensión de la información pública por parte de la ciudadanía (González García & García García, 2022).

Posteriormente, con el propósito de identificar relaciones causales entre las variables analizadas, se aplicó un modelo de regresión lineal múltiple, considerando como variables independientes la transparencia presupuestaria, el acceso a la información pública y la participación ciudadana, mientras que la variable dependiente correspondió a la asignación del gasto público territorial. Los resultados del modelo muestran que la transparencia presupuestaria presenta la mayor capacidad explicativa dentro del modelo estadístico.

Tabla 2

Resultados del modelo de regresión lineal múltiple

Variable independiente	Coefficiente Beta	Significancia (p)
Transparencia presupuestaria	0.61	0.002
Participación ciudadana	0.48	0.010
Acceso a información pública	0.37	0.021

Nota. Coeficientes del modelo de regresión lineal múltiple estimado.

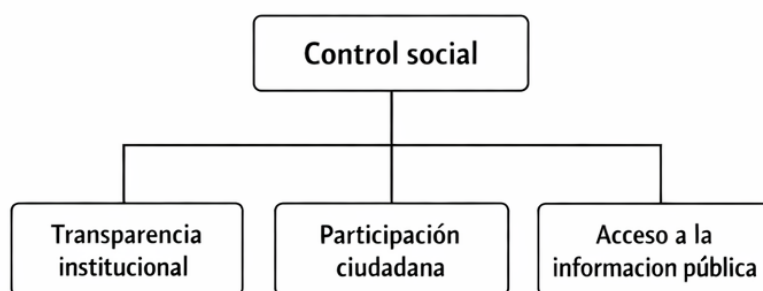
Los resultados del modelo estadístico evidencian que la transparencia presupuestaria constituye el factor que presenta mayor influencia sobre la asignación del gasto público territorial. Este hallazgo confirma que los sistemas de información pública y los mecanismos de rendición de cuentas

representan instrumentos fundamentales para fortalecer la supervisión ciudadana sobre la gestión financiera del sector público. En este sentido, estudios sobre transparencia fiscal han demostrado que la publicación sistemática de información presupuestaria mejora la eficiencia en la asignación de recursos y reduce los riesgos de discrecionalidad administrativa en los gobiernos territoriales (Osorio-Sanabria & Barreto-Granada, 2022). Asimismo, el fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos presupuestarios contribuye a generar mayores niveles de legitimidad institucional y confianza pública en las instituciones gubernamentales (Ruvalcaba-Gómez, 2023).

De manera complementaria, se aplicó un análisis factorial exploratorio con el objetivo de identificar las dimensiones subyacentes que estructuran los mecanismos de control social en la gestión del gasto público territorial. Los resultados permitieron agrupar los indicadores analizados en tres dimensiones principales: transparencia institucional, participación ciudadana y acceso a la información pública.

Figura 1

Dimensiones del control social en la gestión del gasto público territorial



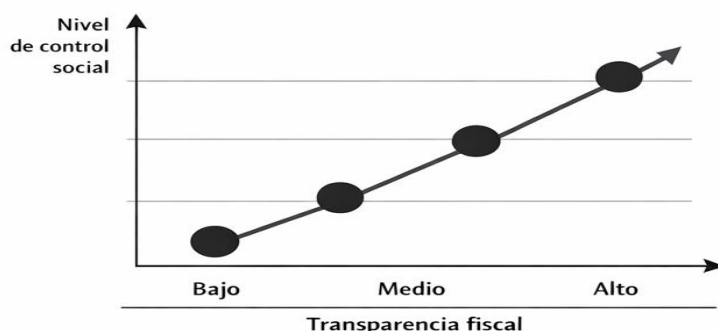
Nota. Representación conceptual de factores identificados mediante análisis factorial exploratorio.

La Figura 1 evidencia que el control social en la gestión del gasto público territorial se configura como un sistema multidimensional que integra mecanismos de transparencia institucional, participación ciudadana y acceso a información pública. Estas dimensiones permiten fortalecer la supervisión social y mejorar la legitimidad de las decisiones presupuestarias adoptadas por los gobiernos territoriales (Finol Romero, 2023).

Finalmente, el análisis comparativo de los indicadores permitió identificar que los territorios con mayores niveles de apertura institucional presentan niveles superiores de control social y mejores resultados en la gestión del gasto público. Este hallazgo coincide con estudios sobre presupuesto participativo y gobernanza territorial, los cuales indican que la participación ciudadana contribuye a mejorar la priorización de proyectos públicos y a fortalecer la rendición de cuentas en la gestión del gasto público (López & Gil-Jaurena, 2021).

Figura 2

Relación entre transparencia fiscal y control social



Nota. Relación ascendente entre transparencia fiscal y control social en el gasto territorial.

Los resultados obtenidos evidencian que el fortalecimiento de la transparencia presupuestaria y la institucionalización de mecanismos de participación ciudadana constituyen factores determinantes para consolidar el control social en la asignación del gasto público territorial. La evidencia empírica sugiere que la apertura de la información pública, combinada con espacios efectivos de participación ciudadana, contribuye significativamente a mejorar la eficiencia, la legitimidad y la transparencia en la gestión financiera pública en los gobiernos territoriales (Maldonado Lozano et al., 2021).

A partir de los resultados obtenidos en el análisis empírico, es posible sostener que el control social desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la transparencia y la legitimidad en la asignación del gasto público territorial. En efecto, los hallazgos evidencian que la transparencia presupuestaria constituye uno de los factores con mayor capacidad explicativa en la supervisión ciudadana sobre la gestión financiera pública. En este sentido, los resultados del modelo de regresión lineal múltiple permiten confirmar que la disponibilidad de información fiscal y la apertura institucional generan condiciones favorables para el ejercicio del control social. Este resultado guarda correspondencia con los planteamientos de Osorio-Sanabria y Barreto-Granada (2022), quienes argumentan que la transparencia pública se configura como un componente estructural del gobierno abierto, al facilitar el acceso de la ciudadanía a información relevante sobre la gestión estatal y promover la rendición de cuentas en la administración pública.

De manera complementaria, los resultados también evidencian que la participación ciudadana incide de manera significativa en el fortalecimiento del control social sobre la asignación del gasto público territorial. En consecuencia, se observa que los territorios que presentan mayores niveles de participación en los procesos de planificación y seguimiento presupuestario tienden a mostrar mayores niveles de supervisión social sobre las decisiones gubernamentales. Este hallazgo resulta consistente con el enfoque de gobierno abierto propuesto por Ruvalcaba-Gómez (2023), quien sostiene que la interacción entre el Estado y la sociedad constituye un elemento esencial para consolidar sistemas de gobernanza más transparentes y responsables. Desde esta perspectiva, la participación ciudadana se configura como un mecanismo que contribuye no solo a ampliar los espacios deliberativos en la gestión pública, sino también a fortalecer la legitimidad institucional de las decisiones presupuestarias.

Asimismo, los resultados obtenidos permiten observar que la transparencia institucional presenta un impacto significativo en la reducción de las asimetrías de información entre las autoridades públicas y la ciudadanía. En efecto, el acceso a información presupuestaria clara y sistematizada facilita el monitoreo social de las decisiones relacionadas con la asignación de recursos públicos. Este planteamiento coincide con lo señalado por Finol Romero (2023), quien sostiene que la transparencia constituye un elemento central en la construcción de sistemas de gobernanza pública orientados a la rendición de cuentas y al fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. En consecuencia, la apertura de información pública no solo contribuye a mejorar los niveles de supervisión social, sino que también favorece la consolidación de entornos institucionales más responsables y orientados al interés colectivo.

Por otra parte, el análisis factorial exploratorio permitió identificar que los mecanismos de control social se estructuran en torno a tres dimensiones fundamentales: transparencia institucional, participación ciudadana y acceso a la información pública. Esta configuración multidimensional coincide con lo planteado por Maldonado Lozano et al. (2021), quienes sostienen que el gobierno abierto se fundamenta en la interacción entre estos componentes para promover una gestión pública más transparente y participativa. Desde esta perspectiva, la articulación entre transparencia, participación y acceso a la información pública permite fortalecer los procesos de supervisión social y mejorar la calidad de las decisiones relacionadas con la gestión del gasto público.

En esta misma línea analítica, los resultados obtenidos evidencian que el acceso a la información pública constituye un factor determinante para el ejercicio efectivo del control social. En efecto, la disponibilidad de información presupuestaria comprensible y accesible permite que la ciudadanía evalúe de manera crítica las decisiones gubernamentales y participe activamente en los procesos de supervisión de la gestión pública. Este planteamiento coincide con lo expuesto por González García y García García (2022), quienes señalan que la transparencia institucional debe ir acompañada de estrategias que garanticen el acceso efectivo de la ciudadanía a la información pública, de modo que los datos gubernamentales puedan convertirse en herramientas reales de vigilancia social.

Del mismo modo, los resultados del estudio muestran que los mecanismos de participación ciudadana, particularmente aquellos vinculados con los presupuestos participativos, pueden contribuir significativamente a mejorar la asignación del gasto público territorial cuando se implementan de manera efectiva dentro de los procesos de planificación presupuestaria. En este sentido, Martínez (2023) señala que los presupuestos participativos constituyen instrumentos relevantes para democratizar la gestión pública, siempre que su diseño institucional garantice procesos deliberativos transparentes y mecanismos claros de seguimiento y evaluación de las decisiones adoptadas.

La discusión de los resultados permite afirmar que el control social en la asignación del gasto público territorial depende de la interacción entre diversos factores institucionales y sociales, entre los cuales destacan la transparencia presupuestaria, la participación ciudadana y el acceso a la información pública. En consecuencia, el fortalecimiento de estas dimensiones puede contribuir significativamente a mejorar los niveles de supervisión social sobre la gestión financiera pública y a

consolidar sistemas de gobernanza territorial más transparentes, responsables y orientados al bienestar colectivo.

Conclusiones

Los resultados del análisis estadístico indican que la transparencia presupuestaria constituye un determinante significativo del control social en la asignación del gasto público territorial. La disponibilidad de información fiscal estructurada y accesible reduce las asimetrías informativas entre gobierno y ciudadanía, facilitando el monitoreo social de la gestión financiera pública. La publicación sistemática de datos presupuestarios mediante portales de transparencia, reportes de ejecución y plataformas de datos abiertos incrementa la capacidad de supervisión ciudadana y fortalece la rendición de cuentas en la gestión del gasto.

Asimismo, la evidencia empírica muestra que la participación ciudadana presenta una asociación positiva con los niveles de control social sobre las decisiones presupuestarias. Los territorios con mayor involucramiento ciudadano en procesos de planificación, seguimiento y evaluación del gasto evidencian mayores niveles de supervisión social y coherencia entre la asignación de recursos y las prioridades territoriales. La institucionalización de mecanismos participativos amplía la deliberación pública y fortalece la gobernanza presupuestaria.

Finalmente, los resultados evidencian que el control social del gasto público territorial responde a una estructura multidimensional integrada por transparencia fiscal, acceso a información pública y participación ciudadana. La interacción entre estas variables incrementa la capacidad de supervisión social y mejora la eficiencia en la asignación de recursos públicos, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la legitimidad de la gestión financiera en los gobiernos territoriales.

Referencias bibliográficas

- Arévalo, J., & Ponce, A. (2021). Participación ciudadana y control social en la gestión pública local en América Latina. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(94), 495–512. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.94.5>
- Cárdenas, J. (2022). Gobernanza pública y control social en la gestión del gasto público territorial. *Revista Iberoamericana de Estudios Municipales*, 25, 95–112. <https://doi.org/10.32457/riem25.1823>
- González, M., & Rivas, L. (2021). Transparencia fiscal y participación ciudadana en gobiernos locales latinoamericanos. *Gestión y Política Pública*, 30(2), 459–486. <https://doi.org/10.29265/gypp.v30i2.917>
- Morales, F., & Ramírez, C. (2023). Mecanismos de control social y rendición de cuentas en la administración pública territorial. *Revista de Administración Pública*, 57(1), 135–158. <https://doi.org/10.18042/cepc/rap.57.05>
- Ramírez, L. (2021). Control social y participación ciudadana en la gestión del presupuesto público local. *Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica*, 15, 73–90. <https://doi.org/10.24965/reala.i15.10934>

- Salinas, P., & Torres, R. (2022). Transparencia presupuestaria y participación ciudadana en gobiernos subnacionales. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, 82, 145–168.
- Arévalo Martínez, R. I., & Negrete Huelga, K. B. (2022). El Gobierno Abierto en México y la evolución de la rendición de cuentas. *Revista Mediterránea de Comunicación*, 13(2), 31–41. <https://doi.org/10.14198/MEDCOM.22107>
- Arosemena, J. N. N. C., Arosemena, J., Núñez, J., & otros autores. (2023). Participación ciudadana y presupuesto participativo. *Revista Científica Empresarial*, 10(2), 278–289. <https://doi.org/10.26495/rce.v10i2.2680>
- Braga, J. V., & Gouveia, F. A. R. (2022). Iniciativas brasileñas para datos gubernamentales abiertos conectados: un análisis del nivel de apertura de datos en las plataformas gubernamentales brasileñas. *Revista Iberoamericana de Ciencias de la Información*, 15(2), 495–515. <https://doi.org/10.26512/rici.v15.n2.2022.42801>
- Delgado Morales, F. (2021). Aproximación al Gobierno Abierto en España: El IV Plan de Acción 2020–2024. *Revista Española de la Transparencia*, (12), 47–63. <https://doi.org/10.51915/ret.143>
- Finol Romero, L. (2023). La transparencia en la perspectiva del gobierno abierto: enfoque y mapa conceptual. *Revista de Derecho (Valdivia)*, 36(2), 141–162. <https://doi.org/10.4067/S0718-09502023000200141>
- Flores Muñoz, F., Gutiérrez Barroso, J., & Báez García, A. J. (2022). Estandarización digital, vulnerabilidad social y gobierno abierto: El caso de XBRL en Europa. *Revista Española de la Transparencia*, (15), 313–327. <https://doi.org/10.51915/ret.222>
- González García, L., & García García, J. (2022). Significado del concepto Gobierno Abierto en las administraciones españolas. *Revista Española de la Transparencia*, (15), 157–180. <https://doi.org/10.51915/ret.224>
- González Gallego, N., Nieto-Torrejón, L., & Pérez-Cárceles, M. C. (2021). Una medida global de gobierno abierto para la OCDE. Recomendaciones para España. *El Trimestre Económico*, 88(349), 219–245. <https://doi.org/10.20430/ete.v88i349.907>
- López, E. d. C. (2021). Gobierno abierto y cultura de la legalidad: Hacia una propuesta de política pública en la Ciudad de México. *Estudios en Derecho a la Información*, 1(13), 3–34. <https://doi.org/10.22201/ijj.25940082e.2022.13.16377>
- López, S., & Gil-Jaurena, I. (2021). Transformaciones del presupuesto participativo en España: De la aplicación del modelo de Porto Alegre a la instrumentalización de las nuevas experiencias. *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, 16(1), 151–174. <https://doi.org/10.14198/OBETS2021.16.1.10>
- Magaña, H. M. G. (2023). Control social o control societal. Las veedurías ciudadanas como proxy de una institución colombiana. *OPERA*, (32), 13–33. <https://doi.org/10.18601/16578651.n32.03>

- Maldonado Lozano, A. E., Paredes Aguilar, L., & Palomino Alvarado, G. del P. (2021). Gestión de gobierno abierto en las instituciones públicas: una revisión de la literatura. *Sapienza: Revista Internacional de Estudios Interdisciplinarios*, 2(2), 137–152. <https://doi.org/10.51798/sijis.v2i2.82>
- Martínez, W. (2023). Presupuestos participativos: características y calidad participativa en los diseños institucionales. *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, 18(1), 133–154. <https://doi.org/10.14198/obets.21914>
- Montero Caro, M. D. (2021). Educación, Gobierno Abierto y progreso: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el ámbito educativo. Una visión crítica de la LOMLOE. *Revista de Educación y Derecho*, (23). <https://doi.org/10.1344/REYD2021.23.34443>
- Osorio-Sanabria, M., & Barreto-Granada, P. (2022). Transparencia pública: análisis de su evolución y aportes para el desarrollo del gobierno abierto. *Innovar*, 32(83), 17–34. <https://doi.org/10.15446/innovar.v32n83.99884>
- Quiroga Mantilla, I., Esteves Fajardo, Z., Melgar-Ojeda, K., & Quito Esteves, A. (2022). Modelo de gobierno abierto para la participación ciudadana. *Cienciamatria*, 8(3), 519–532. <https://doi.org/10.35381/cm.v8i3.783>
- Rodríguez Calzadía, D. A., & Bass Zavala, S. (2023). Situación de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana en las entidades federativas mexicanas frente al reto del COVID-19. *Revista de El Colegio de San Luis*, 13(24), 1–33. <https://doi.org/10.21696/rcsl132420231434>
- Ruvalcaba-Gómez, E. A. (2023). Gobierno abierto: nociones teóricas, acciones y prospectiva. *RC Rendición de Cuentas*, 1(1). <https://doi.org/10.32870/rc.v1i1.24>
- Sánchez-Ramos, M. Á. (2023). Gobierno abierto: Acciones hacia la gobernanza local en México. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 14(27), e574. <https://doi.org/10.23913/ride.v14i27.1716>
- Vaccaro, N. D., Cazzolli, A., & Castro, J. F. (2021). El Gobierno Abierto en la ciudad de Córdoba, Argentina: una política de regulación de la sensibilidad. *Contratexto*, (35), 43–70. <https://doi.org/10.26439/contratexto2021.n035.4899>
- Velasco, D. (2023). Gobernanza territorial y control social del gasto público en América Latina. *Revista Latinoamericana de Administración Pública*, 10(1), 45–63. <https://doi.org/10.5354/0719-0417.2023.68912>